

CHILE Y SU NUEVA CARTOGRAFÍA POLÍTICA.

Estallido, pandemia y desafíos democratizadores en el proceso constituyente.

Claudio Rodríguez Díaz¹

Se vino el estallido...

La sociedad y la política chilena se ha visto fuertemente trastocada a partir del 18 de octubre de 2019. El Estallido Social, marcó un quiebre definitivo con las lógicas transicionales del período pos dictatorial, dando cuenta de una fractura de ancho calado, de dimensiones insospechadas, entre las élites y las instituciones políticas, por un lado, y ciudadanía y el pueblo, por otro. Emerge una nueva cartografía política que, en el marco del proceso constituyente y los efectos de la pandemia, va conformando escenarios inimaginados 10 meses atrás.

No se trata de un acontecimiento planificado, ni tecnocrático. Lo que se cuestiona en el 18-O son los 30 años desde que se inició la transición a la democracia bajo la dirección de los partidos y la denominada “clase política”, privilegiados y separados de la vida común de los chilenos (Garcés:2020). Nos encontramos en medio de un proceso constituyente, inédito y altamente participativo, en el cual se delibera sobre una nueva forma de concebirnos como sociedad.

Conceptos como pueblo o la revalorización de lo popular recobraron sentido y centralidad para poder repensar los nuevos caminos y desafíos políticos y sociales abiertos con la revuelta popular, dando cuenta de un punto de inflexión en la historia del país, el cual se ve finalmente reforzado con el devenir de la pandemia.

En efecto, en un inicio la pandemia pareció una oportunidad para un gobierno fuertemente debilitado y deslegitimado. La gran marcha del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, con la asistencia de 2 millones de mujeres, dejaba al gobierno en un mal pie, sin capacidad

¹El autor es Trabajador Social de la Universidad Católica de Chile. Magister en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Secretario Ejecutivo Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. Académico Universidad de Santiago de Chile.

de respuesta política ante la continuidad y fortalecimiento que esta masiva manifestación representaba para el proceso de movilización y protesta social que se había abierto en el denominado “octubre rojo”. Un gobierno amenazado, sin capacidad de conducción ni gobernabilidad, que se sostenía frágilmente en el acuerdo político del 15 de noviembre. En éste, el oficialismo y los partidos de derecha y una parte de la oposición habían acordado darle salida al conflicto, que amenazaba al gobierno, a través de un acuerdo cupular, sin el mundo social, e intentaba canalizar la demanda social y el proceso constituyente puesto en marcha por la ciudadanía, en un cronograma que abriera un camino institucional para poder cambiar la constitución de 1980 por una construida –por vez primera en la historia de Chile– democráticamente.

En este escenario, la pandemia por el coronavirus representó la última oportunidad para retomar la agenda de gobierno para la derecha pero, desde nuestra óptica, sus respuestas tardías y anquilosadas en la ortodoxia neoliberal terminaron por subsumir finalmente al gobierno en un mayor descrédito. Esto, al no poder dar una respuesta adecuada a las demandas sociales y económicas generadas por la crisis socio sanitaria en curso que, finalmente, venía a confirmar y reforzar los motivos que explicaban el 18 de octubre, como era la gran desigualdad social sobre la que se construyó el modelo económico chileno y, la desconfianza por parte de la mayoría de la población hacia el gobierno y la institucionalidad neoliberal de las últimas décadas. Aparece así, finalmente, reforzada la necesidad de avanzar en el camino de una Nueva Constitución.

El despliegue fallido de la ortodoxia neoliberal: medidas insuficientes para enfrentar la pandemia y el quiebre de la derecha.

El ejecutivo ha llegado mal y tarde con sus propuestas para responder a la crisis. No ha existido relación entre la pertinencia de la respuesta y la magnitud del problema, lo que ha mostrado un gobierno desconectado de la realidad.

Si miramos las cifras, éstas dan cuenta de por qué el hambre y la falta de ingresos se ha constituido en una amenaza de primer orden para el pueblo y los sectores asalariados. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, da cuenta de que el desempleo ha llegado al 12.2%

en el trimestre abril-junio, casi el doble más de los que existía al término del gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet. Al 1,8 millón de empleos perdidos, que se proyecta suba en sus cifras, deben sumarse alrededor de 700 mil trabajadores que están con suspensión laboral, acogidos a la ley de protección del empleo. Esta ley, aprobada a propósito de la pandemia durante su fase inicial, permite el uso del seguro de cesantía para evitar -con fondos de los trabajadores/as- la quiebra o una crisis de las empresas. A estas cifras debe agregarse aquella fuerza laboral que no busca empleo. En total, alrededor del 30% de la fuerza laboral, cerca de 3 millones de trabajadores y trabajadoras, en plena crisis y luchando por la sobrevivencia cotidiana de sus familias.

Ante este escenario la respuesta del gobierno ha sido un conjunto de medidas de corte neoliberal que, bajo la trasnochada lógica de la hiperfocalización, y un discurso de una Red de Protección Social que solo el gobierno logra vislumbrar, buscó privilegiar el bienestar de las empresas, cargando en definitiva sobre los hombros de los propios trabajadores y trabajadoras los efectos de la crisis.

A la ya mencionada ley de protección el empleo, podemos agregar el Ingreso Familiar de Emergencia –IFE- que en sus distintas versiones (IFE 1 en mayo, IFE 2 en junio y una reciente tercera versión aprobada el 31 de julio, que busca aumentar coberturas y simplificar las postulaciones) ha sido insuficiente para que las familias más pobres puedan evitar el hambre y mantener condiciones de confinamiento real, que evite deban movilizarse para obtener ingresos, privilegiando el resguardo de su salud. El motivo de su poca eficiencia radica en que, aparte de la creación de condiciones de ingreso que bajo el criterio de focalización terminan dejando fuera a muchas de las familias que debieran recibir apoyo, cuando éste llega se hace insuficiente, en la medida que el ingreso está alrededor de un 15% por debajo de lo que un hogar necesita para estar sobre la línea de la pobreza.

En este sentido, desde una evaluación de la política pública desplegada, el ejecutivo no ha sido capaz de dar respuestas que cumplan el criterio de suficiencia de un programa social, pero además ha dejado a lo menos 1 millón de hogares que requieren apoyo, sin éste, presentando un fuerte déficit de cobertura a una situación de emergencia social única en 100 años.

Ello provocó en el mes de mayo las llamadas “Protestas del Hambre”. En distintos puntos del país, miles de personas y organizaciones sociales empezaron a manifestarse rompiendo las condiciones de cuarentena para exigir respuestas por parte del gobierno que, manteniendo la ortodoxia neoliberal, proponía como gran solución el acceso a créditos blandos, sin interés, para que la gente pudiera tener acceso a recursos que les permitiera sobrevivir la pandemia.

Esta lógica de sobre endeudar a la población y hacerla cargar con el costo de la crisis, provocó el rechazo mayoritariamente abrumador hacia el gobierno. Ello, sumado al rechazo que el gobierno dio a la propuesta del retiro de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones –AFPs- para paliar la crisis, generó un complejo cuadro de gobernabilidad.

Así lo confirma una nota del periódico La Tercera: “En la agenda Critería de julio la aprobación al Presidente Piñera sigue el descenso iniciado en mayo, llegando en julio a un 12% de aprobación, porcentaje equivalente a los meses post estallido social del octubre”, sostiene Critería en el reporte. “La marcada distancia con el proyecto de retiro del 10% de los ahorros previsionales le pasó la cuenta a un gobierno que ya venía cuestionado por el manejo de la crisis sanitaria, particularmente con la transparencia en torno a las cifras”, añade la nota.

Inclusive dentro del propio sector oficialista el gobierno fue perdiendo apoyo. La explicación a ello la podemos encontrar, en parte, en el debate creciente dentro de la derecha entre lo que se ha denominado una “derecha social” y una “derecha económica”, que ha dado cuenta de la falta de cohesión del bloque hegemónico. Al respecto, esta última es la que ha tenido predominio en la esfera política en las últimas 4 décadas. Surgida a partir de la incidencia que tuvo la mirada económica que provocó la revolución neoliberal en contexto de dictadura, mantuvo su hegemonía en el período de transición para encausar dicha etapa desde su rol opositor, pero habría demostrado su poca capacidad de gobernar al responder a las demandas sociales con fórmulas economicistas que no logran hacer sentido común con una ciudadanía más crítica y que hoy demanda soluciones políticas, resituando al Estado como un actor clave en asegurar mayores condiciones de protección y bienestar.(Herrera:2020)

Se trataría de la emergencia de una corriente más política en la derecha, que mira con recelo el apego irrestricto y la sobreideologización de las miradas economicistas que ven la subsidiariedad como un dogma, al lado del cual se encuentran los enemigos o, como veremos, incluso los traidores. Una crítica a la mirada extremadamente sesgada y principista sobre el neoliberalismo que tiene un sector mayoritario de la derecha, que basa solo en criterios económicos la toma de decisiones políticas.

En palabras de uno de los nuevos referentes intelectuales de la derecha, como es el académico Hugo Herrera, “la crítica es al economicismo, no a la economía. Vale decir, a la reducción de la política a la economía, según la idea de Friedman y sus legitimarios chilenos ya mencionada de que el orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado. Atender a la economía es condición mínima de una política responsable. El economicismo, en cambio, pervierte la política. En él, la política ya no puede dirigirse eminentemente al despliegue de todos los aspectos de los miembros de un pueblo, su faceta individual y comunitaria.” (Herrera, p.9:2020)

Desde nuestra mirada, acá encontraríamos una de las diferencias político ideológicas de la clase dominante; un punto de divergencia de miradas, dentro de la cual se fragmenta el apego irrestricto a la doctrina más dura del neoliberalismo. Esto, como un proceso importante de seguir en observación a su desarrollo, en cuanto abre un espacio más amplio de cuestionamiento al orden neoliberal en su versión más ortodoxa.

La Respuesta Popular. “El pueblo ayuda al pueblo” y el retiro del 10% de los fondos de las AFPs.

Al calor del cuestionamiento a la institucionalidad y el modelo neoliberal, subyacente al estallido social de octubre de 2019, se fue configurando un proceso de rearticulación y politización de las fuerzas populares, que ha ido tomado una fisonomía particular en el contexto de la pandemia.

En el marco de la crisis generada a partir de los problemas económicos que devienen de la contracción productiva, han surgido diversas iniciativas y respuestas desde el propio mundo popular. Este ya transitaba con experiencias de organización desde el mundo social, sindical

y territorial a partir del inicio del proceso constituyente abierto por el pueblo el 18 de octubre del año pasado. Ejemplos son los cabildos ciudadanos y las asambleas territoriales que se han generado. A ello, se suma un acumulado de organización social y política que recogen las experiencias que han tenido los movimientos sociales en los últimos lustros como son el movimiento estudiantil y regional de 2011, sindical, ecologista y feminista, entre otros. (Garcés:2020). Este acumulado, hoy encuentra un anclaje territorial, con expresiones comunitarias y solidarias que adquieren mayor visibilidad. Ello, reforzado en el marco de la crisis social y económica generada a propósito de la pandemia.

Quizás la más reconocida es el resurgimiento de las Ollas Comunes, como respuesta al problema del hambre, que han impulsado las organizaciones sociales, sindicales, asambleas y cabildos. Se trata de una respuesta efectiva que recoge la memoria organizacional del pueblo para articular respuestas solidarias y comunitarias en condiciones de crisis económica que, junto con entregar alimentación a los sectores afectados, simbolizan un imaginario crítico y contracultural a las lógicas neoliberales que han imperado en las últimas décadas. Las mismas lógicas desde las cuales el gobierno construyó respuestas que se presentaron insuficientes y no tuvieron un reconocimiento ético político en la población.

Bajo el slogan de “el pueblo ayuda al pueblo” se ha ido conformando un imaginario político nuevo, que da cuenta de una forma distinta de abordar la crisis, donde junto a las miles de ollas comunes, aparecen variadas respuestas solidarias de apoyo en asistencia social, compra de insumos y equipamientos básicos para enfrentar la crisis como la entrega de pañales, productos sanitarios y camas. De igual forma, otros más promocionales como la compra de insumos básicos de forma colectiva (comprando juntos), cooperativas orientadas a la subsistencia, desarrollo de huertas comunitarias e incluso asistencia en materia de violencia intrafamiliar y cuidados.

Junto a esta multiplicidad de acciones levantadas desde las organizaciones sindicales, sociales y vecinales, ha tenido una gran repercusión la movilización ciudadana generada en torno al retiro del 10% de las AFPs. Esta aparece como una forma de encontrar una respuesta concreta a las necesidades económicas producto de la pérdida o disminución de ingresos. Ello, acicateado por la insuficiencia de las respuestas que el gobierno ha promovido desde su

mirada economicista, subsidiaria y que denota la ausencia de un Estado garante o protector de la población.

Ante la propuesta de retiro del 10% del fondo de pensiones, presentada por sectores de la oposición en el Congreso, se articuló una fuerte campaña del terror desplegada desde los grupos económicos, encabezados por la propia Confederación de la Producción y el Comercio –CPC- y la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, que logró alinear al gobierno y a la mayor parte de la derecha.

Así, ante la ausencia de la iniciativa legislativa por parte del ejecutivo, que en materias de seguridad social es atribución del Presidente según la constitución política, la salida fue promover una reforma constitucional que permitiera por vez única y en el escenario de crisis, sacar parte de los fondos de pensiones.

La iniciativa encontró un apoyo abrumador por parte de la ciudadanía, así como logró unir a la oposición. La encuesta de CADEM –encuestadora asociada a sectores de derecha- previa a la aprobación del retiro, indicaba que el 86% de la población apoyaba el sacar el 10%, así como que el 51% lo usaría para la compra de alimentos o insumos básicos. Ello fue generando una mayoría que empezó a expresarse también en el parlamento en el momento de la discusión de la señalada reforma constitucional.

La propuesta representaba para los sectores dominantes una amenaza a la institucionalidad y la gobernabilidad, al saltar la atribución presidencial mediante una reforma constitucional. Paradójicamente los argumentos señalados para trabar la iniciativa fueron contruidos con un discurso que se alejaba del neoliberalismo que proclaman. De esta manera, se señaló que ello implicaba trastocar los principios de la seguridad social; que era el Estado quien debía dar respuesta a la crisis y que ésta no tenía que salir de los fondos de los propios trabajadores y trabajadoras, afectando su futura pensión. También se señaló que representaba una política regresiva, que favorecería a sectores más acomodados que no requerirían apoyo. Adicionalmente, se remarcaba que podría generar una gran crisis en el sistema financiero al retirar cerca de 20.000 millones de dólares que harían que las inversiones decayeran afectando la imagen país, lo que generaría un marco de inestabilidad para la inversión que afectaría la economía. Una perfecta película de terror que no amilanó el sentir de la población, la cual demostró con ello la desconfianza hacia los discursos del empresariado y el gobierno.

La ciudadanía, en tanto, veía el retiro de fondos no solo como una medida eficaz, si no que representaba un acto de justicia haciendo propio a la vez lo que por cerca de 30 años el discurso neoliberal le había indicado para, entre otras cosas, evitar una reforma de fondo al sistema de capitalización individual que sostiene el sistema financiero en Chile. En efecto, se señaló de forma permanente que los fondos de pensiones son de los trabajadores y ninguna reforma podría tocar fondos que les pertenecen. Cuando el gobierno de la ex presidenta Bachelet propuso el aumento de la cotización y la creación de un pilar colectivo (de reparto) la respuesta de la entonces oposición neoliberal fue que ello era “meterle la mano al bolsillo de la gente.” Ahora, la gente iba por lo suyo.

Así las cosas, lo paradójal resultó que fue el propio discurso neoliberal el que permitió correr el cerco al principal nudo del sistema económico chileno, como es el sistema de pensiones. El día de la votación en la cámara de diputados hubo una gran movilización ciudadana, caceroleos que se escucharon a lo largo de todos los rincones del país, que dieron cuenta de la presión existente al mundo político para aprobar la reforma, lo que encontró eco finalmente en propios legisladores de derecha que, desoyendo al gobierno y a los grupos económicos que los sustentan, apoyaron la iniciativa logrando los 3/5 del quorum necesario. Ello, en medio de un gran debate sobre los riesgos que significaría que se rechazara la propuesta con la posibilidad que se produjera un segundo estallido social en plena pandemia. Estos legisladores fueron tildados por su propio sector de “populistas”, en el mejor de los casos, y “traidores”, en la mayoría de las acusaciones políticas sostenidas en su contra. Finalmente, cuando la discusión fue aprobada por la Cámara de diputados y pasó al Senado, éste la aprobó con un quorum mayor a los 2/3, lo que hacía inviable un veto por parte del presidente de la República. Se configuraba una gran derrota política para el gobierno.

En tanto, desde distintos sectores de oposición el retiro de fondos aparecía como una mala política pública, pero necesaria de realizar ante la ausencia de respuestas por parte de la autoridad. Representaba una medida de corte neoliberal que, si bien no tocaba necesariamente el modelo de pensiones impuesto en dictadura, sí respondía a las aspiraciones de un pueblo necesitado y que ahora, pos estallido social, estaba empoderado. Para otros sectores de la oposición, más críticos al modelo de capitalización individual, implicaba

también la oportunidad de correr el cerco a un sistema de pensiones que en 40 años parecía inmodificable.

Más allá de ciertas diferencias existentes en las ópticas de análisis, ello permitió en lo político ordenar a una oposición que pudo encontrar una respuesta unificada ante la demanda ciudadana, logrando una sintonía importante que parecía perdida ante decisiones que, enmarcadas en la tecnocracia neoliberal, muchas veces han dado la espalda a las demandas populares.

La paradoja del propio neoliberalismo como escenario para su superación.

Es importante profundizar lo que aparece como una paradoja: mientras por una parte el retiro del 10% aparece como un triunfo popular o ciudadano, por otra se muestra como una consolidación de un ethos neoliberal presente en la población. Ello es necesario de considerar en el contexto de cambios en que se encuentra el país y la posibilidad que el proceso constituyente representa para salir del neoliberalismo y pensar en un modelo de desarrollo pos extractivista.

En el caso del sistema de pensiones, éste ha sido el sostén del modelo neoliberal en Chile, y es necesario de transformar para poder construir un sistema real de seguridad social en el marco de un nuevo modelo de desarrollo. No obstante, la duda que emerge es si este triunfo ciudadano abre realmente la posibilidad de una transformación de fondo del sistema de pensiones. Así lo refleja la reciente Encuesta del mes de Julio de Data Influye, donde el 52% de los encuestados responde que no pondría a disposición fondos individuales del 10% para contribuir a la construcción de un sistema de pensiones solidario de reparto.

Para algunos actores esto representaría una suerte de paradoja pues no se toca el modelo. Así lo representa por ejemplo Daniel Mansuy, académico y analista de cuño liberal que señala que “buena parte del progresismo aspira a realizar cambios muy profundos en el país; pero, sin advertirlo del todo, estaría horadando las condiciones de posibilidad de esos cambios”. En este sentido, la izquierda habría apelado al derecho de propiedad como argumento central para defender el retiro de fondos, lo que trabaría cualquier propuesta futura que busque introducir mayores grados de solidaridad al incremento de las tasas de cotización.

Desde nuestra mirada, si bien no puede entenderse a priori como una medida que signifique un triunfo anti neoliberal, y pareciera tener cabida el que esta medida no ataca el modelo, sí representa algo de enorme relevancia política: cuestiona el poder. En efecto, no representa necesariamente un triunfo para transformar el modelo, pero sí da cuenta de la posibilidad de transformación del poder popular y ciudadano en el Chile actual, dando cuenta de un *nuevo modus operandi político* en las formas de tomar decisiones, hegemonizadas en los últimos años por representantes populares que muchas veces han sido correa transmisora de los grandes grupos económicos y las miradas tecnocráticas de orden neoliberal.

De esta forma, finalmente la pandemia ha devenido en una oportunidad perdida para la derecha. Pareciera ésta definitivamente ha desaprovechado su última posibilidad de recuperar una legitimidad perdida y cuestionada. Ello contrasta con la reafirmación de las potencialidades de un pueblo que emerge como un actor que no podrá ser dejado de lado a la hora de las grandes decisiones de futuro. Asistimos a la retirada de la técnica económica neoliberal, la “cofradía de los expertos”, y la vuelta de la política como espacio articulador de los sentidos y proyectos societales que están en disputa desde el 18-O. Este es el espacio de reconstrucción que se abre para los sectores anti neoliberales y aparece como el principal desafío para la diáspora opositora para encontrar un espacio de encuentro que, al calor del proceso constituyente y con el protagonismo ciudadano y popular, pueda pensar en superar el dogmatismo neoliberal que ha dominado la esfera política y social en el Chile de los últimos 40 años. Finalmente, el pueblo va abriendo los espacios de transformación político social del Chile del siglo XXI.

¿Hacia dónde transita el proceso constituyente? Un escenario político en disputa.

En este complejo e insospechado cuadro político y social emergen distintas posibilidades de desarrollo y proyección del proceso y sus efectos en la correlación de fuerzas y alianzas existente, de cara al plebiscito del 25 de octubre y de lo que de él se deriva.

Por una parte, el atrincheramiento de la derecha más dura, que se apega a la ortodoxia neoliberal. Ella, de raigambre pinochetista y fascista, se aglutinará mayoritariamente en torno a la opción Rechazo para el plebiscito del 25 de octubre. La aspiración electoral será llegar

al 30% de la votación para quedar en posición de optar en un futuro acto de elección de asambleístas o constituyentes poder alcanzar sobre 1/3 de los votos para asegurar el veto en la Convención o Asamblea Constituyente a definiciones contrarias a sus intereses. No es descartable que estos sectores, minoritarios, pero fácticos y con mucho poder en tanto agrupa al gran empresariado, buscarán las formas de deslegitimar el proceso constituyente y, al calor de la pandemia y la crisis sanitaria en curso, incluso intentarán postergar el plebiscito buscando resolver la crisis dentro de los marcos institucionales actuales que se abren en el cronograma electoral el año 2021. Ello permitiría dar atribuciones para redactar una nueva constitución al parlamento que se elija, evitando el camino de una instancia propiamente constituyente, soberana, como lo es una asamblea o convención constitucional plenamente electa por los ciudadanos. Ese es el camino para poder finalmente imponer su objetivo de reformar la constitución pinochetista y evitar su desmantelamiento. Para ello la derecha ya sostiene la idea de reducir el número de parlamentarios, lo que tendería a una nueva “binominalización” del Congreso, reduciendo sus posibilidades transformadoras.

Otro sector mayoritario, pero muy diverso y contradictorio, que incluye sectores de derecha, apoyará la opción Apruebo, pues comparten el diagnóstico que es a través de un nuevo contrato social la forma de lograr por una vía dialógica y democrática nuevos marcos institucionales que permitan canalizar la expresión y los derechos de los ciudadanos en el marco de una convivencia social legitimada.

En este escenario, creemos la pandemia ha venido finalmente a reforzar los factores o causas que provocaron el estallido social, develando el carácter limitado y deslegitimado de nuestra democracia de baja intensidad y de la institucionalidad actual, así como la profunda desigualdad y problemas sociales incubados al calor de los 30 años de predominio neoliberal.

En este contexto, será relevante cómo se dilucide finalmente la fragmentación o quiebre en que se encuentra actualmente la clase dominante. Ella se expresa en términos políticos en la disputa que se da al interior de la derecha entre los sectores más conservadores y dogmáticos y aquellos que quieren avanzar a la conformación de una nueva derecha, que sea capaz de interpretar a la ciudadanía construyendo espacios desde una esfera social y cultural y no solo económica.

Por su parte, la oposición tendrá un devenir cuyo derrotero no está escrito. Hoy, en torno al mal manejo de Piñera y su gobierno con la pandemia, particularmente al calor de la discusión sobre el retiro de fondos previsionales, ha encontrado un espacio de entendimiento y sintonía ciudadana que le ha hecho salir de la irrelevancia política. No obstante, la diversidad de su composición ideológica y política hace complejo aventurar una articulación más amplia de cara a ser una alternativa mayoritaria de gobierno el año 2021.

Quien se visualiza como candidato mejor posicionado es el comunista Daniel Jadue, con alta valoración ciudadana a partir de su gran gestión como alcalde del municipio metropolitano de Recoleta. Si bien Chile aún tiene altos grados de anticomunismo, que van más allá de la tradicional crítica de la derecha y sectores de centro, su gestión transformadora en el municipio le ha dado un perfil innovativo e independiente de los grandes poderes sistémicos, lo que lo hace contar con un creciente apoyo popular, cultivando un liderazgo que lo encumbra, hoy en día, como la posibilidad más cierta de la oposición. El desafío pasará por proponer una salida de corte popular y anti neoliberal, que logre congregarse a la diversidad de sectores de oposición social y política, en la mayor amplitud posible.

En este orden de cosas, también podría emerger alguna alternativa por parte del Frente Amplio, nuevo referente de la política nacional surgido mayormente del movimiento estudiantil de 2011 que, si bien representa un cambio generacional importante y contiene un importante sector anti neoliberal, aún se debate en la búsqueda de una identidad y rumbo político, representando una gran variedad de sensibilidades políticas, culturales e ideológicas que están aún en proceso de definición.

Así, la rearticulación de la(s) izquierda(s), que incluye a sectores socialistas que se han desmarcado del giro socialdemócrata del partido socialista, como Fuerza Común o Plataforma Socialista, aparece como una tarea política de primer orden, de cara a avanzar en un proceso de acumulación de fuerzas que se oriente a superar el neoliberalismo.

Por su parte, tampoco aparecen liderazgos en la socialdemocracia y sectores del social cristianismo, probablemente nombres y sectores desgastados ante la ciudadanía y que representan mayormente un imaginario político de continuidad de la ex Concertación y su política de los consensos con la derecha, que finalmente consolidó el neoliberalismo en la pos dictadura. Aún en proceso de recomposición, estos sectores se debaten entre quienes

defienden con orgullo lo realizado en la transición y aquellos más críticos, que buscan nuevos espacios de articulación social y política en el Chile de hoy.

La disputa política en Chile para la(s) izquierda(s) representa un gran desafío, en el marco de un laberinto que está dando forma a una nueva cartografía político social. El canto enarbolado por las masas en torno a “Chile Despertó” y bajo el eslogan “Hasta que la Dignidad se haga costumbre”, ha abierto una posibilidad como nunca antes vista de poder avanzar hacia una sociedad pos neoliberal. En este sentido, se requiere redoblar esfuerzos de articulación que recojan la experiencia y potencia transformadora del estallido social, que sobrepasa e interpela la clásica noción de conducción o catalizador entregada a los partidos políticos. En este camino, es importante observar la experiencia de Unidad Social, espacio de articulación del mundo social que incluye a sectores tradicionales como la Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, y a movimientos nuevos como No + AFP y la Coordinadora 8M, junto a un centenar de otras organizaciones. Desde acá se ha sostenido un esfuerzo unitario que si es capaz de proyectarse desde sus diferencias y da cabida a la pluralidad de culturas disidentes que en ella se expresan, puede adquirir protagonismo en el desafío de avanzar a una sociedad pos neoliberal.

En este contexto, se hace imprescindible y estratégico trabajar en dos frentes. Primero, apoyar sin ninguna vacilación y con todas las fuerzas el triunfo de la opción Apruebo en el plebiscito, evitando que la crisis sanitaria devenga en la suspensión de éste y en cualquier tipo de acuerdo que busque una salida distinta a la expresada por el pueblo en estos últimos meses. En segundo término, fortalecer el trabajo y vinculación territorial de cara al proceso constituyente. Poder ser parte y levantar el discurso de la multiplicidad de actores presentes en los territorios, en los comedores populares, ollas comunes, asambleas y cabildos, iniciativas solidarias y de apoyo social de las propias organizaciones vecinales, adquiere un carácter estratégico en el proceso de transformación del neoliberalismo en Chile. No se trata solo de ser representantes de esa expresión, sino también de abrir espacios de expresión y participación vinculante y protagónica que permita que esa diversidad de experiencias y discursos tengan espacio real de incidencia en el proceso constituyente.

En este escenario, puede ser clave el rol que juegue el movimiento social en el proceso constituyente en desarrollo. Nos referimos a la experiencia de las distintas movilizaciones

que contienen una crítica al modelo, iniciadas desde 2006 con la movilización de los estudiantes secundarios, conocida como la “revolución pingüina”, con una primera señal clara de la ruptura entre institucionalidad y sociedad dada a partir del movimiento estudiantil de 2011. (Garreton:2016) A ello se suman otras expresiones hoy, como el movimiento feminista y No +AFP que, entre otros, contienen una multiplicidad de demandas y propuestas construidas a partir de la crítica al modelo patriarcal capitalista y neoliberal.

Esta tarea implica redoblar la presencia y trabajo en el mundo territorial, así como en las organizaciones sindicales y de cesantes, de forma de poder ir construyendo una confluencia político social en el plano local y territorial. Cualquier salida a la crisis político institucional más grande desde el término de la dictadura ya no será posible sin el pueblo y sin las mayorías sociales, ciudadanas y populares perderá legitimidad y sostenibilidad. La disputa por la salida anti neoliberal está abierta por el propio andar y las demandas del pueblo expresadas a partir del 18-O. Esa es la posibilidad y desafío en curso.

El estallido social, en perspectiva de construcción de una alternativa al neoliberalismo desde la(s) izquierda(s), puede verse como una derrota cultural parcial del neoliberalismo. Sin embargo, para su consolidación requiere del despliegue de un proyecto de largo plazo, con propuesta de crecimiento y sostenibilidad económica, y donde la variable ecológica debe ser central. Desde esta perspectiva un desafío relevante será lo que se puede denominar disputa del sentido común. Este se ve como uno de los límites y problemas que han tenido las experiencias de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica (García Linera:2020) A ello, debieran sumarse como componente central las demandas y actoría del movimiento feminista y de los pueblos indígenas.

Es decir, en el caso chileno, la tarea es enfrentar el ethos individual que aparece consolidado en buena parte de la ciudadanía tras 40 años de neoliberalismo. En este sentido, creemos que la posibilidad de su superación y la construcción de un nuevo modelo de desarrollo y proyecto societal requerirá de un fuerte y sistemático proceso de pedagogía y práctica política contracultural que recoja el ethos solidario que surge desde las experiencias de articulación y organización social que se han desplegado desde el estallido social. Canalizar esa fuerza social y cultural será un desafío para los sectores progresistas en el proceso constituyente,

una vez triunfe –como creemos y esperamos- la opción Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre.

Referencias bibliográficas.

Herrera, Hugo. “Los caminos ideológicos de la derecha chilena.” Ciper académico. Julio 2020.

Mansuy, Daniel. La gran paradoja. Columna de opinión del 26 de julio en El Mercurio, Cuerpo D P.7. <https://www.ieschile.cl/2020/07/la-gran-paradoja/>

Garcés, Mario. Estallido Social y una Nueva Constitución para Chile. LOM ediciones 2020.

García Linera, Álvaro. “El Futuro de la izquierda y la dignidad humana.” PP 177-203. En Las sendas abiertas de América Latina. Aprendizajes y desafíos para una nueva agenda de transformaciones. Daniel Filmus y Lucila Rosso (compiladores). CLACSO 2019.

Garretón, Manuel Antonio. La Gran Ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI. LOM ediciones 2016.

Encuestas

Encuesta CADEM 340 del 20 de julio de 2020. Ver en <https://plazapublica.cl/wp-content/uploads/2020/07/Track-PP-340-Julio-S3.pdf>

Encuesta Data Influye. Julio de 2020. Ver en https://www.tuinfluyes.com/assets/estudios/ESTUDIO_TUINFLUYES_JULIO_2020.pdf

Notas de Prensa

“Aprobación de Piñera cae a 12%, porcentaje equivalente a los meses post estallido social.” <https://www.latercera.com/politica/noticia/criteria-aprobacion-de-pinera-cae-a-un-12-porcentaje-equivalente-a-los-meses-post-estallido-social/FWIAFNTALVAUDHWF2M5OED3LOY/>